SALA REGIONAL DE CHIAPAS.

EXPEDIENTE: 410/23-19-01-7-OT.

ACTOR: ********* ****** ****** *********

AUTORIDAD DEMANDADA: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DE CHIAPAS "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

MAGISTRADO INSTRUCTOR: LIC. ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.

SECRETARIA DE ACUERDOS: LIC. MARÍA DEL CARMEN RIVERA ZALDIVAR.

SENTENCIA DEFINITIVA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiséis de enero de dos mil veinticuatro. Estando debidamente integrada la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el Magistrado Licenciado **ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA**, adscrito a la Primera Ponencia a partir del día 16 de marzo de 2020, conforme a lo establecido en los puntos Primero y Cuarto del Acuerdo G/JGA/33/2020, dictado el 12 de marzo de 2020, por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por la Licenciada **LIDIA MARGARITA ROBLERO HERNÁNDEZ**, Primera Secretaria de Acuerdos de la Segunda Ponencia, en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, en términos de lo previsto en los puntos 13, 14, 15, 16, Cuarto y Quinto del acuerdo antes descrito y, en calidad de Presidenta de esta Sala y, la Licenciada **ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, Primera Secretaria de Acuerdos de la Tercera Ponencia, en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley e Instructora de la Tercera Ponencia, de conformidad con los puntos Segundo, Tercero y Quinto del Acuerdo **G/JGA/24/2021**, de 13 de mayo de 2021, dictado por la indicada Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, ambas con apoyo en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada **María del Carmen Rivera Zaldivar,** en los términos de los artículos **49, 50, 51 y 52** de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo federal que se señala al rubro; y,

RESULTANDO

1.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el día tres de abril de dos mil veintitrés, el C. ********** ******* ******* *********, por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número ********** de ** ** ******* ** ****, a través de la cual la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chiapas "1" al resolver el recurso de revocación en línea número ********** determinó confirmar la resolución contenida en el oficio número ********** de ** ** ********** ** ****, por medio de la cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" determinó no reconocer la preferencia del crédito derivado del embargo realizado para cubrir los créditos fiscales determinados en la resolución número ********** de ** ** ********** ** ****.

2.- Previo requerimiento y cumplimiento al mismo, m ediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de nulidad interpuesta, se ordenó correr traslado a las autoridades enjuiciadas para que la contestaran dentro del término de ley; asimismo, se requirió a la autoridad enjuiciada la exhibición del expediente administrativo del que deriva la resolución impugnada.

3.- A través del oficio ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, la Administradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Chiapas "1" del Servicio de Administración Tributaria, formuló su contestación de demanda y exhibió el expediente administrativo que le fue requerido.

4.- Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés se tuvo por contestada la demanda; asimismo se requirió a la autoridad demandada la exhibición de unas probanzas, requerimiento que cumplimentó mediante oficio ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el veintinueve de agosto siguiente.

5.- En auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado a la autoridad demandada mediante diverso proveído de diez de agosto del citado año; asimismo, se otorgó a la parte actora el plazo de ley para formular su ampliación de

demanda, derecho que ejerció por escrito ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el veintinueve de septiembre siguiente.

6.- Mediante proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por formulada la ampliación de demanda, y se otorgó a la autoridad demandada el plazo de ley para formular su contestación respectiva.

7.- Mediante oficio ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el treinta de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad demandada formuló su contestación a la ampliación de demanda y, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se concedió a las partes el término de ley para que formularan alegatos por escrito, derecho que ejerció la autoridad demandada por oficio ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el veintiocho de noviembre siguiente.

8.- Con acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, tomando en consideración que no existía alguna cuestión pendiente de resolver y que impidiera dictar sentencia en este asunto, en los términos del artículo 47, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró cerrada la instrucción del juicio y se ordenó la formulación del proyecto respectivo y el turno de los autos a esta Sala a efecto de que se dicte la resolución que conforme a derecho corresponda.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Esta Sala Regional de Chiapas es competente para dictar sentencia en este asunto, en los términos de los artículos 1, 3, 29, 30, 31 y 34 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, en vigor el día 19 del citado mes y año; 9, primer párrafo, fracción III,

12, primer párrafo, fracciones II y VIII, 48, primer párrafo, fracción XIX y 49, primer párrafo, fracción XIX, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020, dado que la resolución impugnada se ubica en la hipótesis contemplada en las fracciones V y XIII del artículo 3 de la citada Ley Orgánica, aunado a que el domicilio fiscal de la parte actora se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de esta Sala.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 14 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por la exhibición que de la misma hace la parte actora, la cual fue plenamente reconocida por la autoridad al formular su contestación de demanda.

TERCERO.- Al encontrarse relacionados entre sí, este Juzgador procede al estudio de los argumentos que el enjuiciante hace valer en los conceptos de impugnación **PRIMERO, SEGUNDO** y **TERCERO** de la demanda, así como **PRIMERO, SEGUNDO** y **TERCERO** de la ampliación de la misma, en los cuales señala:

1) **Concepto de impugnación primero de la demanda.** Que es ilegal la resolución impugnada, por confirmar de manera contraria a derecho el procedimiento administrativo de ejecución, iniciado con el mandamiento de ejecución, en la etapa de embargo, al ser tercero excluyente del crédito con preferencia del bien inmueble ubicado en la ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******** **, régimen de propiedad en condominio horizontal denominado "******* *********", colonia *********, en la ciudad de ****** ********** *******, del propietario C. ******** ***** ********, ya que, mediante el expediente número 892/2010, presentado el día 09 de agosto del 2010, radicado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Juzgado Segundo Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y expediente número 894/2010, presentado el día 09 de agosto del 2010, radicado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Juzgado Quinto Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es acreedor sobre dicho bien inmueble, por lo tanto, se afecta y se le causa un agravio a su esfera jurídica de derechos, vulnerando la legalidad de los actos de molestia, seguridad jurídica y patrimonio.

2) Que la autoridad demandada en la resolución impugnada transgrede sus derechos fundamentales por confirmar de manera contraria a derecho la resolución de origen emitida por la autoridad ejecutora que

dio inicio al Procedimiento Administrativo de Ejecución en contra de un bien inmueble que combatió en la litis de origen, lo anterior, violenta los artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, con relación a los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero; 17, 27 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3) Que se debe reconocer la figura jurídica llamada tercería de crédito preferente por prelación, toda vez que, como particular pretende que se le reconozca el derecho que tiene sobre dicho bien inmueble embargado, conforme al artículo 128 del Código Fiscal de la Federación.

4) Que es ilegal la resolución con número de oficio 600-19-00-00-002023-0544, de fecha 10 de febrero del 2023 y notificada el 16 de febrero del 2023, a través del Buzón Tributario, emitida por la Administración General Jurídica, Administración Desconcentrada Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria debido a que, confirma el Procedimiento Administrativo de Ejecución iniciado con el Mandamiento de Ejecución emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1 del Servicio de Administración Tributaria.

5) Que los artículos 472 y 473 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevén ciertos mecanismos que tienden a proteger los intereses de los acreedores, por lo que la autoridad fiscal debió ordenar se solicitara y se exhibiera un certificado, ya sea de gravámenes, o de libertad de gravámenes, del inmueble sujeto a remate emitido por el Registro Público de la Propiedad y, sólo hasta obtenerlo debe iniciar el procedimiento de remate.

6) Que con la finalidad de orientar a esta autoridad para que se le aplique la figura conocida en la teoría general del proceso como tercería excluyente de preferencia, con la intención de liberar de todo gravamen el bien inmueble y defenderlo de la agresión patrimonial, cuyo objeto es la exclusión del bien afectado en virtud de un título legítimo del tercerista, acción opositora que sólo pretende se reconozca o declare el derecho y el levantamiento del gravamen, toda vez que, el gravamen interpuesto de su parte fue con una fecha anterior a la que pretende la autoridad fiscal, cita la tesis de rubro "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. EL TERCERISTA DEBE INSCRIBIR EL EMBARGO DE UNA NEGOCIACIÓN MERCANTIL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE SURTA EFECTOS LA PRELACIÓN FRENTE A LA PARTE EJECUTANTE."

7) Que con la imagen escaneada obtenida del siguiente enlace https:/la r.siat.sat. ob.mx/PTSC/subasta/buscar/buscarResultados.xhtml, se advierte que la autoridad fiscal reconoce que es acreedor del bien inmueble ubicado en ubicado en ** ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** *** * ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** **********"* ******* *********, en la ciudad de ****** ********** *******, del propietario C. ******** ***** ******** publicado a remate en la subasta 7804-1.

8) Que solicita se revoque el acto impugnado, debido a que hace valer la ilegalidad del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), derivado de la existencia de un crédito fiscal determinado a un contribuyente ajeno, toda vez que, tiene un crédito preferente por orden de prelación, porque el gravamen que impuso al bien inmueble en litis fue anterior al que pretende ejecutar la autoridad fiscal.

9) Que el crédito fiscal que motivó el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), había sido determinado a un diverso contribuyente, por lo cual, interpuso el recurso de revocación, en términos de! artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, en este sentido, es ilegal que la autoridad no hubiese realizado las gestiones necesarias para que la autoridad no remate dicho bien inmueble.

10) Que la autoridad fiscal jamás verificó y demostró conforme a derecho que el crédito fiscal con número de oficio 110-05-03-01-03-2012-2807, por $13,910,962.00 (trece millones novecientos diez mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), es preferente al de la moral Inmobiliaria la ***** *** ******* **** ** ****, para poder realizar algún gravamen al bien inmueble antes referido, el Servicio de Administración Tributaria debió asegurarse que el crédito fiscal era preferente por orden de prelación conforme a derecho y por documento impreso con los fundamentos correspondientes, y así poder ser sujeto de embargo.

11) Que el Servicio de Administración Tributaria, debe efectuar las gestiones necesarias para no continuar con su procedimiento para rematar el bien inmueble.

12) Que el Procedimiento Administrativo de Ejecución y la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre del 2022, practicado con la finalidad de ejecutar el bien inmueble ubicado en la ** ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** *********"* ******* *********, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del propietario C. ******** ***** ********, causa un agravio a su esfera jurídica de derechos fundamentales tutelado por la carta magna, para salvaguardar sus derechos humanos violentados como los de seguridad jurídica en los artículos 14 párrafo segundo, legalidad constitucional que consiste en que, todo acto de autoridad sin excepción debe de estar fundado y motivado, de no ser así, debemos aceptar el inicio del autoritarismo artículo 16 párrafo primero y 17, párrafo segundo y tercero, relacionado con el acceso a la justicia.

13) Que todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de igual forma, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rediseña la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer e! control de constitucionalidad, dándole una amplia aplicación e interpretación a las leyes.

14) Que solicita se declare la nulidad lisa y llana del Procedimiento Administrativo de Ejecución y la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre del 2022, en contra del bien inmueble ubicado en la ** ******* ***** ********* ******* ************** *********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** **********"* ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** *******, del propietario C. ******** ***** ********, conforme a los artículos 51, fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

15) **Concepto de impugnación segundo de la demanda.** Que es ilegal la resolución impugnada, toda vez que niega lisa y llanamente conforme al artículo 68, del Código Fiscal de la Federación conocer o que se le haya notificado en días y horas hábiles, el procedimiento administrativo de ejecución en contra del bien inmueble ubicado en la ** ******* ***** ********* ******* ************** *********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** **********"* ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** *******, para cobrar el crédito fiscal en contra del propietario c. ******** ***** ********, por lo tanto, para impugnar el procedimiento administrativo de ejecución al cual tiene derecho por medio del recurso de revocación conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del código fiscal de la federación, se requiere que la autoridad fiscal le dé a conocer el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 del código fiscal de la federación, 16, fracción II y 42 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo.

16) Que la representación jurídica de la autoridad demandada fue completamente omisa en cumplir con la carga probatoria que le imponen los artículos 16, primer párrafo, fracción II, y 42, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

17) Que solicita que al momento de dictar la sentencia que en derecho proceda, se estime fundado su concepto de impugnación, en consecuencia, se determine que la autoridad demandada no cumplió con la carga probatoria que le imponen los artículos 16, primer párrafo, fracción II, y 42, del Código Fiscal de la Federación, y, por ende, declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas.

18) Que solicita se declare la nulidad lisa y llana del Procedimiento Administrativo de Ejecución y la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre del 2022, en contra del bien inmueble ubicado en ** ******* ***** ********* ******* ************** *********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******* *********"* ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** *******, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del propietario C. ******** ***** ********, conforme a los artículos 51, fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

19) **Concepto de impugnación tercero.** Que niega lisa y llanamente que la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre publicada en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria bajo el número 7804-15 contenga firma autógrafa o firma electrónica avanzada del funcionario competente, conforme a lo dispuesto por los artículos 38, fracción V, y 68, del código fiscal de la federación, 16, fracción II y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

20) Que en la resolución impugnada en las fojas 17 y 18 la enjuiciada no dio contestación sobre el agravio que ataca la ilegalidad de que la convocatoria a remate no tiene firma autógrafa o electrónica. Por lo tanto, además la autoridad demandada nunca demostró que la convocatoria a remate si tuviera dicho requisito que establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 38, fracción V.

21) Puede apreciarse de manera evidente en el siguiente enlace https://agr.siat.sat.qob.mx/PTSC/subasta/descripcionBien/bienDetalle.xhtml, que la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre del 2022, no tiene firma autógrafa conforme a lo dispuesto por los artículos 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación.

22) Que solicita es declare la nulidad lisa y llana del Procedimiento Administrativo de Ejecución y la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre de 2022, en contra del bien inmueble ubicado en ** ******* ***** ********* ******* ************** *********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******* *********"* ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** *******, del propietario C. ******** ***** ********, conforme al artículo 51 , fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

23) **Concepto de impugnación primero de la ampliación de demanda.** Que es ilegal la resolución con impugnada, por confirmar de manera contraria a derecho el procedimiento administrativo de ejecución, iniciado con el mandamiento de ejecución, en la etapa de embargo, al ser tercero excluyente del crédito con preferencia del bien inmueble ubicado en la ******* ***** ********* ******* ************** *********** ****** **** ******** **, régimen de propiedad en condominio horizontal denominado "******* *********", colonia ********, en la ciudad de ****** ********** *******, del propietario c. ******** ***** ********, ya que, mediante el expediente número 892/2010, presentado el día 09 de agosto del 2010, radicado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Juzgado Segundo Civil

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y expediente número 894/2010, presentado el día 09 de agosto del 2010, radicado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Juzgado Quinto Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es acreedor sobre dicho bien inmueble, por lo tanto, se afecta y se le causa un agravio a su esfera jurídica de derechos, vulnerando la legalidad de los actos de molestia, seguridad jurídica y patrimonio.

24) Que la autoridad demandada en la resolución impugnada transgrede sus derechos fundamentales por confirmar de manera contraria a derecho la resolución de origen emitida por la autoridad ejecutora que dio inicio al Procedimiento Administrativo de Ejecución en contra de un bien inmueble que combatió en la litis de origen, lo anterior, violenta los artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, con relación a los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero; 17, 27 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

25) Que se debe reconocer la figura jurídica llamada tercería de crédito preferente por prelación, toda vez que, como particular pretende que se le reconozca el derecho que tiene sobre dicho bien inmueble embargado, conforme al artículo 128 del Código Fiscal de la Federación.

26) Que es ilegal la resolución con número de oficio 600-19-00-00-002023-0544, de fecha 10 de febrero del 2023 y notificada el 16 de febrero del 2023, a través del Buzón Tributario, emitida por la Administración General Jurídica, Administración Desconcentrada Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria debido a que, confirma el Procedimiento Administrativo de Ejecución iniciado con el Mandamiento de Ejecución emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1 del Servicio de Administración Tributaria.

27) Que los artículos 472 y 473 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevén ciertos mecanismos que tienden a proteger los intereses de los acreedores, por lo que la autoridad fiscal debió ordenar se solicitara y se exhibiera un certificado, ya sea de gravámenes, o de libertad de gravámenes, del inmueble sujeto a remate emitido por el Registro Público de la Propiedad y, sólo hasta obtenerlo debe iniciar el procedimiento de remate.

28) Que con la finalidad de orientar a esta autoridad para que se le aplique la figura conocida en la teoría general del proceso como tercería excluyente de preferencia, con la intención de liberar de todo gravamen el bien inmueble y defenderlo de la agresión patrimonial,

cuyo objeto es la exclusión del bien afectado en virtud de un título legítimo del tercerista, acción opositora que sólo pretende se reconozca o declare el derecho y el levantamiento del gravamen, toda vez que, el gravamen interpuesto de su parte fue con una fecha anterior a la que pretende la autoridad fiscal, cita la tesis de rubro "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. EL TERCERISTA DEBE INSCRIBIR EL EMBARGO DE UNA NEGOCIACIÓN MERCANTIL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE SURTA EFECTOS LA PRELACIÓN FRENTE A LA PARTE EJECUTANTE."

29) Que con la imagen escaneada obtenida del siguiente enlace https:/lar.siat.sat. ob.mx/PTSC/subasta/buscar/buscarResultados.xhtml, se advierte que la autoridad fiscal reconoce que es acreedor del bien inmueble ubicado en ubicado en ** ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** *** * ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "********** ******* ********, en la ciudad de ****** ********** *******, del propietario C. ******** ***** ******** publicado a remate en la subasta 7804-1.

30) Que solicita se revoque el acto impugnado, debido a que hace valer la ilegalidad del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), derivado de la existencia de un crédito fiscal determinado a un contribuyente ajeno, toda vez que, tiene un crédito preferente por orden de prelación, porque el gravamen que impuso al bien inmueble en litis fue anterior al que pretende ejecutar la autoridad fiscal.

31) Que el crédito fiscal que motivó el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), había sido determinado a un diverso contribuyente, por lo cual, interpuso el recurso de revocación, en términos de! artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, en este sentido, es ilegal que la autoridad no hubiese realizado las gestiones necesarias para que la autoridad no remate dicho bien inmueble.

32) Que la autoridad fiscal jamás verificó y demostró conforme a derecho que el crédito fiscal con número de oficio 110-05-03-01-03-2012-2807, por $13,910,962.00 (trece millones novecientos diez mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), es preferente al de la moral Inmobiliaria la ***** *** ******* **** ** ****, para poder realizar algún gravamen al bien inmueble antes referido, el Servicio de Administración Tributaria debió asegurarse que el crédito fiscal era preferente por orden de prelación conforme a derecho y por documento impreso con los fundamentos correspondientes, y así poder ser sujeto de embargo.

33) Que el Servicio de Administración Tributaria, debe efectuar las gestiones necesarias para no continuar con su procedimiento para rematar el bien inmueble.

34) Que el Procedimiento Administrativo de Ejecución y la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre del 2022, practicado con la finalidad de ejecutar el bien inmueble ubicado en la ** ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******* *********"* ******* *********, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, del propietario C. ******** ***** ********, causa un agravio a su esfera jurídica de derechos fundamentales tutelado por la carta magna, para salvaguardar sus derechos humanos violentados como los de seguridad jurídica en los artículos 14 párrafo segundo, legalidad constitucional que consiste en que, todo acto de autoridad sin excepción debe de estar fundado y motivado, de no ser así, debemos aceptar el inicio del autoritarismo artículo 16 párrafo primero y 17, párrafo segundo y tercero, relacionado con el acceso a la justicia.

35) Que todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de igual forma, en el artículo 1 0 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rediseña la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer e! control de constitucionalidad, dándole una amplia aplicación e interpretación a las leyes.

36) Que solicita se declare la nulidad lisa y llana del Procedimiento Administrativo de Ejecución y la convocatoria a remate de fecha 9 de noviembre del 2022, en contra del bien inmueble ubicado en la ** ******* ***** ********* ******* ************** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** **********"* ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** *******, del propietario C. ******** ***** ********, conforme a los artículos 51, fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

37) **Concepto de impugnación segundo de la ampliación de demanda.** Que es ilegal la resolución impugnada, dado que niega lisa y llanamente conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, conocer o que se le haya notificado en días y horas hábiles el procedimiento administrativo de ejecución en contra del bien inmueble ubicado en la ** ******* ***** ********* ******* ************** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** **********"* ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** *******; toda vez que, para impugnar el procedimiento administrativo de ejecución al cual tiene derecho por medio del recurso de revocación conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, se requiere que la autoridad fiscal le dé a conocer el procedimiento administrativo de ejecución para poder defenderse, conforme a lo dispuesto en los artículos 16, fracción II y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cargas probatorias que la demandada fue omisa en cumplir.

38) Que solicita se considere fundado su concepto de impugnación y se determine que la autoridad incumplió su carga probatoria, debiendo

declarar la nulidad lisa y llana del procedimiento administrativo de ejecución.

39) **Concepto de impugnación tercero de la ampliación de demanda.** Que niega lisa y llanamente conocer que la convocatoria de remate de 9 de noviembre publicada en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria bajo el número 7804-1 contenga firma autógrafa o firma electrónica avanzada del funcionario competente conforme a lo dispuesto en los artículos 38, fracción V y 68 del Código Fiscal de la Federación, así como 16, fracción II y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada.

Por su parte, la unidad jurídica encargada de la defensa de las enjuiciadas al contestar la demanda, sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada.

Así, de los argumentos del demandante, se advierte que la litis en el presente considerando estriba en determinar la legalidad de la resolución impugnada, definiendo si el promovente acreditó tener interés jurídico para promover en contra de la convocatoria de remate del bien inmueble ubicado en *a* ******* ***** ********* ******* ************** *********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** **********"* ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** *******, emitida a fin de hacer efectivo el crédito fiscal a cargo de ******** ***** ********, manifestando para tal efecto una preferencia de cobro de crédito, ello a partir de las pruebas aportadas en el recurso de revocación para acreditar dicho interés jurídico.

Los argumentos de la parte actora resultan **infundados e inoperantes** para lograr la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada, al tenor de los razonamientos siguientes:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado para poder afectar válidamente la esfera jurídica del gobernado.

La fundamentación es la expresión precisa de los preceptos legales aplicables al caso, en tanto que la motivación es el señalamiento con

precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, esto es, los razonamientos que llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que se invoca.

Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 73, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Séptima Época, Tomo: III, Segunda Parte del Apéndice 1917-1995, misma que resulta obligatoria para este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:

> **"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-** De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/43, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, visible a página 769, misma que resulta obligatoria para este Tribunal, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto señalan:

> **"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.** La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."

En el expediente en que se actúa, a fojas 30 a 48 obra agregada la resolución impugnada en la presente instancia contenida en el oficio número ********** de ** ** ******* ** ****, a través de la cual la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chiapas "1" al resolver el recurso de revocación en línea número ********** determinó confirmar la resolución contenida en el oficio número ********** de ** ** ********** ** ****, por medio de la cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" determinó no reconocer la preferencia del crédito derivado del embargo realizado para cubrir los créditos fiscales determinados en la resolución número ********** de ** ** ********** ** ****, de la cual se desprende que la autoridad emisora señaló como motivos y fundamentos los siguientes:

Al efecto, la autoridad demanda admitió del Recurso Administrativo de Revocación en Línea presentado por el "**C.** ********* ****** ****** ********", en contra de la *"la resolución en donde se publica la* ***Convocatoria de Remate de fecha 09 de noviembre de 2022 y el Procedimiento Administrativo de Ejecución en todas sus etapas***", solicitando que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales, en relación al remate respecto del bien inmueble ubicado en ** ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ********** "******** **********"* ******* *********, en la ciudad de ****** ********** *******, propiedad del contribuyente deudor **C.** ******** ***** ********.

Luego, como una cuestión previa, la enjuiciada indicó advertir que el promovente realizó manifestaciones encaminadas a controvertir el Procedimiento Administrativo de Ejecución, sin embargo, dichos argumentos resultaban inatendibles por inoperantes, toda vez que el promovente no cuenta con el interés jurídico para impugnar las actuaciones llevadas a cabo dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución instaurado en contra del **C.** ******** ***** ********, dado que el ahora actor únicamente comparece en su carácter de tercero, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, señaló que el enjuiciante compareció en su carácter de tercero, por lo que debía limitarse a acreditar que el crédito a su favor es preferente al crédito fiscal a fin de que se le reconozca tal derecho, pero sin

que pueda controvertir el Procedimiento Administrativo de Ejecución por causas diversas, ya que tales prerrogativas son únicas y exclusivas del **C.** ******** ***** ********, quien es el contribuyente que soporta el crédito fiscal.

Posteriormente, anotó que al haber transcurrido el plazo establecido en el último párrafo del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación vigente, sin que el promovente anunciara pruebas adicionales a las ofrecidas en su escrito inicial del recurso de revocación, procedió a realizar el estudio de la resolución impugnada, tomando en consideración las constancias que obran en el expediente administrativo correspondiente, así como las pruebas ofrecidas por el recurrente de mérito dentro del recurso de revocación en cuestión, mismas que tuvo a la vista, y valoró en términos de lo previsto en el quinto párrafo del artículo 130 del Código Fiscal de la Federación.

Asentó, que una vez analizada la argumentación hecha valer por el entonces recurrente, las pruebas exhibidas y las demás constancias que integran el expediente administrativo consideró que sus argumentos eran infundados, al advertir que su pretensión es que se le reconozca el derecho de preferencia, puesto que aduce tener un crédito preferente por orden de prelación el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxtla Gutierrez, en la Sección 2ª, Libro 9-2010, Registro 3874 de fecha 23 de septiembre de 2010, en relación al inmueble ubicado en 1ª Avenida Norte Poniente, esquina Circunvalación Pichucalco número 341, vivienda 04, régimen de propiedad en condominio Horizontal de nominado “Privada Moctezuma”, Colonia Moctezuma, en la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

No obstante, considero que si bien existía un gravamen inscrito a su nombre, el cual se desprende del Certificado de Libertad o Gravamen de 16 de diciembre de 2022, que esa autoridad solicitó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Tuxtla Gutiérrez y que sirve para motivar la

resolución en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto era que el fisco federal cuenta con la preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé que el fisco federal tiene preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, siempre y cuando sean anteriores a la notificación del crédito fiscal y esté inscrito en el registro público que corresponda; los adeudos por alimentos, salarios o sueldos devengados en el último año y las indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del trabajo, sin que en el caso el hoy actor encuadre en alguno de los supuestos de excepción para que se le otorgue la preferencia frente al fisco.

Al efecto, indicó que del análisis a los argumentos, conjuntamente con las pruebas ofrecidas por el recurrente conoció que si bien en es cierto, resulta ser acreedor sobre el bien inmueble ubicado en *a ******* ***** ********* ******* ************** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ** ******** "******** **********"* ******* *********, en la ciudad de ****** ********** *******, por así comprobarse del certificado de libertad o gravamen de fecha 16 de diciembre 2022, donde se aprecia la inscripción del embargo derivado del juicio de arrendamiento inmobiliario inscrito en la Sección 2ª, Libro 9-2010, Registro 3874 de fecha 23 de septiembre 2010, también era cierto que dicho crédito del cual pretende la preferencia de pago, deriva de un adeudo por arrendamiento inmobiliario tal y como se puede se aprecia del expediente 894/2010 del Juzgado Quinto del Ramo Civil, que fue ofrecido como prueba por el propio promovente, de ahí que no pueda reconocérsele el derecho de preferencia sobre el fisco federal, puesto que, los únicos supuestos de excepción son los establecidos en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, sin que los adeudos derivados por arrendamiento inmobiliario se encuentren contenidos en tales supuestos de excepción, como equivocadamente lo pretendía hacer valer.

Luego, manifestó que de las constancias que obran en el expediente administrativo, así como las aportadas por el recurrente, no se lograba comprobar que cumpliera con alguna de las excepciones del

artículo 149, del Código Fiscal de la Federación, ya que los juicios interpuestos por el recurrente corresponden a juicios de arrendamiento inmobiliario, sin que de ellos se desprenda que correspondan a un adeudo garantizado como prenda o hipoteca, adeudos por alimentos, salarios o sueldos y las indemnizaciones a los trabajadores, siendo claro que el fisco tiene preferencia de pago sobre el entonces recurrente, toda vez que no acredita que se configure una de las excepciones establecidas, en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación.

Que con las pruebas antes analizadas exhibidas por el entonces recurrente, dentro del recurso de revocación, a las cuales otorgó pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que se trata de documentos públicos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 128 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia discal de conformidad por lo establecido en el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, advirtió que aun cuando se le reconoce la calidad de acreedor, el derecho de preferencia que manifiesta tener sobre el fisco resulta inoperante, toda vez que no acredita que se configure una de las excepciones del artículo 149, del Código Fiscal de la Federación.

Señaló que no era obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad recaudadora a través de su página de internet en la liga: https://agr.siat.sat.gob.mx/PTSC/subasta/buscarResultados.xhtml, lo hubiera señalado como acreedor del bien inmueble sujeto a remate, ya que tal situación no trascienda a que la autoridad lo reconozca como acreedor preferente, sino más bien dicha situación es en atención única y exclusivamente al Certificado de Libertad o Gravamen de fecha 16 de diciembre de 2022, solicitado por esa autoridad al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxtla Gutierrez, en el cual se aprecia que el ahora recurrente es acreedor del **C.** ******** ***** ********, advirtiéndose el

gravamen sobre el bien inmueble ubicado en *a ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ** ******** "******** *********", ******* *********, en la ciudad de ****** *********, Chiapas, de ahí que en dicha publicación la autoridad recaudadora señale que es acreedora del **C. ******** ***** ********,** respecto del bien inmueble sujeto a remate, a fin de que esté en posibilidades de manifestar lo que a su derecho convenga, pero sin que con tal situación se le reconozca que tiene derecho de preferencia sobre el Fisco Federal.

También, precisó que los argumentos del promovente en el sentido de que se deje sin efectos el Procedimiento Administrativo de Ejecución, resultan inoperantes, ya que dichos actos de cobro están dirigidos al C. ******** ***** ********, y el ahora promovente únicamente comparece en su carácter de tercero pretendiendo se le reconozca la preferencia sobre los créditos fiscales, de ahí que no es procedente que intente controvertir el Procedimiento Administrativo de Ejecución, ya que su actuar únicamente debe limitarse a acreditar que los créditos inscritos a su favor tienen preferencia sobre los créditos fiscales derivados de la resolución determinante **110-05-03-01-03-2012-287 de 14 de septiembre de 2012**, emitida por la Administración Central de Auditoria de Operaciones de Comercio Exterior, y no tratar de acreditar que el Procedimiento Administrativo de Ejecución es ilegal por diversas razones.

Que por tanto, no existía obligación por parte de la autoridad exactora de notificarle todas las actuaciones del Procedimiento Administrativo de Ejecución, puesto que tal procedimiento está enderezado para hacer efectivo el crédito fiscal a nombre del **C. ******** ***** ********.**

Luego, asentó que del análisis realizado a la constancias relativas a la notificación del oficio **400-20-00-02-01-2022-011572** de fecha 09 de noviembre de 2022, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", advirtió que le fue notificado legalmente de manera electrónica, **el día 24 de noviembre de 2022**, tal y como se aprecia de la constancia de notificación electrónica de esa misma fecha la cual se encuentra agregada al expediente administrativo que obra abierto en la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", por lo que la misma se llevó a cabo en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 134,

fracción I párrafos sexto y séptimo, en relación con el articulo 17-K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, indicando que se tiene por realizada la notificación con el promovente el día **24 de noviembre de 2022.**

Seguidamente, declaró que del análisis jurídico que realizó a las constancias de notificación transcritas, advirtió que la autoridad emisora notificó legalmente y de manera electrónica a través del buzón tributario del ahora demandante el oficio por medio del cual se comunicaba el periodo de remate, a fin de que estuviera en posibilidad de manifestar lo que a su derecho conviniera.

Así que, se reitera que no le asiste la razón al ocursante cuando manifiesta desconocer el Procedimiento Administrativo de Ejecución, ya que contrario a lo argumentado, es evidente que el oficio por medio del cual se le notificó el periodo de remate le fue debidamente notificado en fecha **24 de noviembre de 2022** a través del buzón tributario en términos de lo dispuesto por el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, siendo comprobado con el **Aviso electrónico de notificación pendiente en el Buzón Tributario de fechas 17 de noviembre de 2022**, así como de la **constancia de notificación de fecha 24 de noviembre de 2022**, documentos que por ser públicos cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con el quinto párrafo del artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, en relación con lo dispuesto en los numerales 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia fiscal de conformidad con el artículo 5 del citado Código Fiscal de la Federación, por lo que no le fue notificado el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

En otro aspecto, consideró **inoperantes** los argumentos del recurrente, en los que pretendió controvertir los actos emitidos en relación al Procedimiento Administrativo de Ejecución y los actos posteriores como lo es la convocatoria de remate, al no estar dirigidos a la ahora actor.

Ello atendiendo a que la convocatoria de remate no le causa perjuicio al no estar dirigido al accionante, sino al público en general en términos del artículo 176 del Código Fiscal de la Federación, sin que hubiese especificaciones particulares que hiciesen presumir que dicho documento es dirigido de manera específica al actor.

No obstante, señaló que de conformidad con el artículo 177 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad está obligada a notificarle al ahora recurrente el periodo de remate en su carácter de acreedor, siendo que fue debidamente notificado en fecha 24 de noviembre de 2022, mediante oficio **400-20-00-02-01-2022-011572, de fecha 9 de noviembre de 2022**, tal y como consta del **Aviso electrónico de notificación pendiente en el Buzón Tributario de fecha 17 de noviembre de 2022**, **y la constancia de notificación de fecha 24 de noviembre de 2022,** por lo que era claro que la recaudadora le notificó el oficio mediante el cual se le informa el periodo de remate del bien inmueble ubicado en *a ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ** ******** "******* *********"** ******* *********, en la ciudad de ****** ********** *******, propiedad del contribuyente deudor **C. ******** ***** ********.**

Concluyendo, que al hoy demandante se le notificó el periodo de remate mediante oficio **400-20-00-02-01-2022-011572**, de fecha 09 de noviembre de 2022, en fecha 24 de noviembre de 2022, documento que además contiene firma electrónica de la funcionaria que lo emitió.

Igualmente, asentó que no debía pasarse por alto que, del Certificado de Libertad o Gravamen, de fecha 16 de noviembre de 2022, que esa Autoridad solicitó al Registro Público de Propiedad y del Comercio y que servía para motivar la resolución impugnada en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, advirtió que existen acreedores preferentes en Orden de Prelación de conformidad con el artículo 149, párrafo primero, del citado Código Fiscal de la Federación.

Finalmente, determinó no reconocer la preferencia del crédito derivado del embargo inscrito en la Sección 2ª, Libro 9-2010, Registro 3874 de fecha 23 de septiembre de 2010 derivado del juicio de arrendamiento inmobiliario, sobre los créditos fiscales derivados de la resolución

determinante **110-05-03-01-03-2012-287 de 14 de septiembre de 2012**, emitida por la Administración Central de Auditoria de Operaciones de Comercio Exterior.

De lo anterior, esta Sala colige que la autoridad resolutora determinó que con las pruebas aportadas en el recurso administrativo de revocación el hoy actor no acreditó su preferencia para el cobro del crédito en relación al inmueble ubicado en *a ******* ***** ********* ******* ************** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********* ** ********** ********** ** ******** "******* *********", Colonia ********a, en la ciudad de ****** ********** *******, al no actualizarse alguna de las excepciones previstas en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, ya que los juicios interpuestos por el recurrente con los que pretendía comprobar su pretensión corresponden a juicios de arrendamiento inmobiliario, sin que de ellos se desprenda que correspondan a un adeudo garantizado como prenda o hipoteca, adeudos por alimentos, salarios o sueldos y las indemnizaciones a los trabajadores, siendo claro que el fisco tiene preferencia de pago sobre el entonces recurrente.

Como se indicó, los argumentos que hace valer el actor son infundados por una parte e inoperantes en otra, conforme a lo siguiente.

Así, para una mejor comprensión a la litis planteada, resulta menester precisar que en el numeral 145 del Código Fiscal de la Federación, se prevé la facultad de las autoridades fiscales para exigir el cobro de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados en los plazos que señala la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

A su vez el diverso numeral 151 del señalado ordenamiento legal, refiere que para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, las autoridades requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de

inmediato al embargo de bienes suficientes para, en su caso rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco.

En relación con lo anterior el mismo Código Tributario en sus artículos 173 a 196, prevé el procedimiento a seguir para llevar acabo el remate de los bienes embargados y finalmente el numeral 194 del Código Fiscal de la Federación, se establece la aplicación del producto obtenido por el remate, enajenación o adjudicación de los bienes embargados

Ahora bien, por resultar trascendente para resolver el presente asunto, se reproduce el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, donde el legislador estableció las reglas sobre la preferencia del fisco federal respecto de créditos:

> "**Artículo 149**.- **El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir**, **con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo**.
>
> Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, **será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda** y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.
>
> **La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo**.
>
> En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución."
>
> Lo resaltado es propio.

Así, del numeral transcrito se obtiene que, el fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de:

-Adeudos garantizados con prenda o hipoteca,

- De alimentos y,

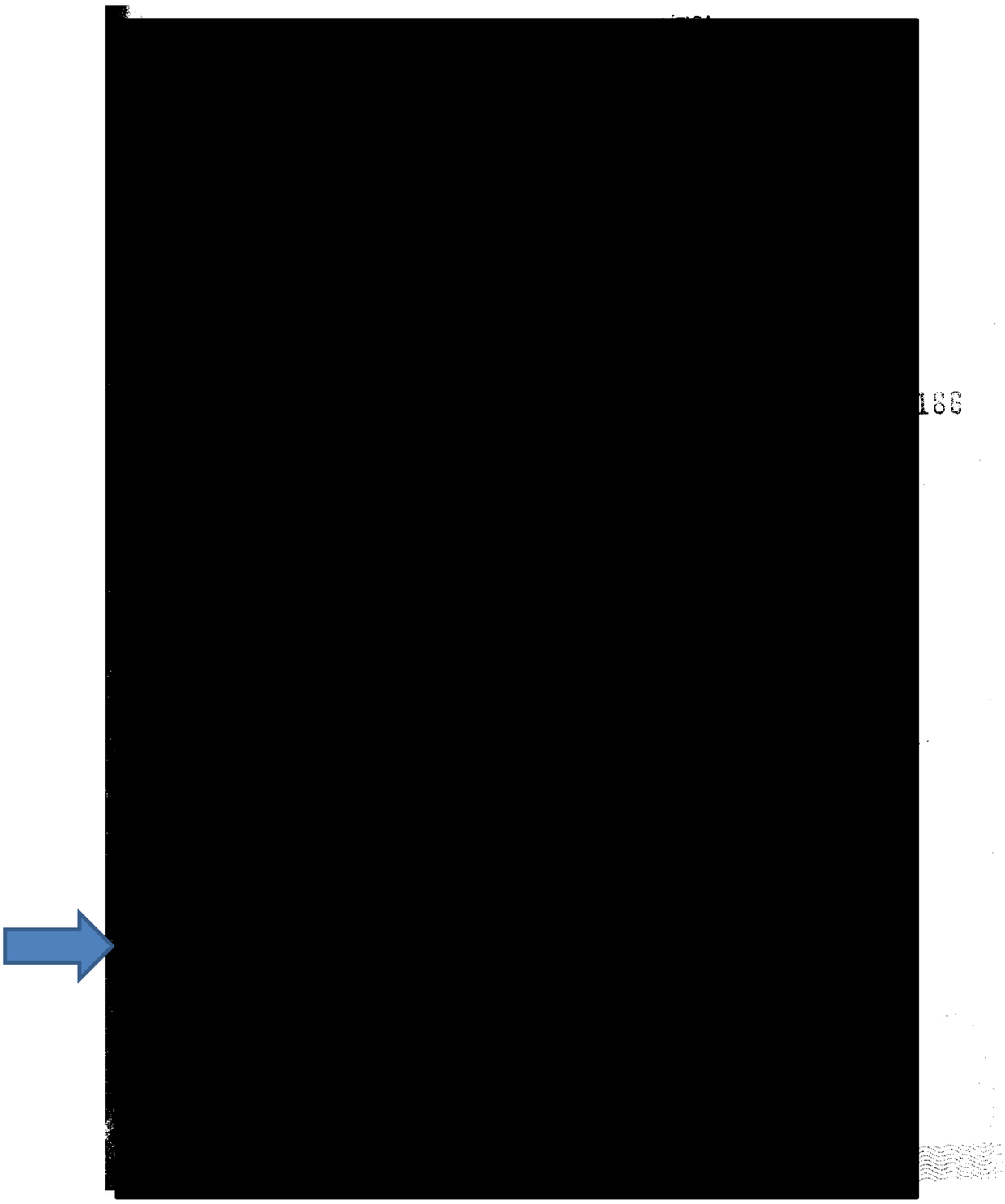
-De salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

También estatuye que para que sea aplicable la excepción precisada en los incisos anteriores, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes, por lo que la vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.

Establecido lo anterior, esta Sala procede a determinar si el actor cumple con los requisitos que estatuye el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, esto es, si demuestra ser deudor preferente respecto del bien inmueble materia de controversia, propiedad del C. ******** ***** ********, (deudor del crédito fiscal determinado a través del ********** de ** ** ********** ** **** emitido por la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior).

Al efecto, se indica que el hoy actor promovió recurso de revocación en contra de la publicación de la convocatoria de remate de fecha 9 de noviembre de 2022 y el procedimiento administrativo de ejecución en todas sus etapas, en relación al remate del bien inmueble ubicado en *a ******* ***** ********** ******* ********** ********** ****** **** ******** *** ******* ** ********** ** ********** ********** ********** "******** **********", en la ciudad de ****** ********** *******, propiedad del contribuyente deudor C. ******** ***** ********, al considerar que tiene preferencia de pago.

Para acreditar su pretensión, al promover el recurso de revocación exhibió el certificado de libertad o gravamen de fecha 25 de noviembre de 2022, expedido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al que se concede valor probatorio pleno en los términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de un documento público, a través del cual el actor refirió acreditar la existencia de un embargo sobre el bien inmueble identificado como: ******* ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** ******* propiedad de ******** ***** ********, inscrito en la Sección 2ª, Libro 9-2010, Registro 3874 de fecha 23 de septiembre 2010, derivado del expediente número 894/2010 (f. 166), como se advierte a continuación en su parte conducente:



Asimismo, obra en autos la sentencia definitiva de fecha 14 de marzo de 2011, emitida en el expediente 892/2010 del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla (fs. 130 a 137 de autos), de la cual se advierte que tiene como origen la demanda presentada por el C. ****** ****** ********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la

persona moral denominada ********** ** ***** *** ******** **** ** ***., por medio de la cual promovió juicio de arrendamiento inmobiliario en contra del C. ******** ***** ********, en su carácter de arrendatario.

Con lo hasta aquí expuesto, es evidente para esta Juzgadora que acorde con las constancias exhibidas por las partes, el hoy actor no acredita que se actualice el supuesto de excepción para la preferencia del demandante en oposición al fisco federal, en términos del artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, dado que el adeudo que tiene el C. ******** ***** ********, deriva de un juicio de arrendamiento inmobiliario, sin que el demandante compruebe que se trate de un adeudo garantizado con prenda o hipoteca, alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

De ahí que, es insuficiente que el referido adeudo se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio desde el 23 de septiembre de 2010 para considerarlo preferente, como pretende el accionante, según sus manifestaciones resumidas en los **numerales 3)** y **8),** pues para que sea aplicable la excepción precisada en aludido artículo 149, no solo es requisito indispensable que su inscripción se efectué con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, sino también que se trate de un adeudo garantizado con prenda o hipoteca, lo que en el caso no ocurre.

Por tanto, se considera que el actor no cumple con los requisitos previstos en el citado precepto, para tener preferencia para recibir el pago del crédito que recae sobre el bien embargado por la autoridad.

Y, si bien el actor funda su pretensión en lo dispuesto en el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación[1], del cual se advierte que el tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran

[1] "**Artículo 128**.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal."

preferentemente a los fiscales federales, puede hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal, es decir, se refiere a la tercería excluyente de preferencia, la cual que se basa en el mejor derecho que el tercero afirma tener para que su crédito sea pagado en primer lugar, lo cierto es que debe acreditar ese derecho.

Para ello, debe probar no solamente que el crédito que considera es preferente se encuentre inscrito en fecha anterior a que surta efectos la notificación del crédito que el fisco federal pretende cobrar, si no también que se encuentre garantizado con prenda o hipoteca, siendo por tanto infundado su argumento resumido en el **numeral 6),** donde pretende se le reconozca el derecho como tercero excluyente con la aplicación de la tesis de rubro "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. EL TERCERISTA DEBE INSCRIBIR EL EMBARGO DE UNA NEGOCIACIÓN MERCANTIL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE SURTA EFECTOS LA PRELACIÓN FRENTE A LA PARTE EJECUTANTE."[2], al tratarse de una tesis aislada que no es vinculante para ese Órgano Jurisdiccional, aunado a que se trata de una tesis en materia civil, perdiendo de vista que la materia fiscal tiene sus propias reglas, que en el caso están previstas en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación ya analizado, el cual señala claramente los casos en los que el fisco federal será preferente sobre aquellos créditos que debió recibir.

Por tanto, es insuficiente que el actor exhibiera el certificado de libertad o gravamen de fecha 25 de noviembre de 2022, expedido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dado que del mismo no se advierte la existencia de un crédito preferente de los previstos en el artículo 149 del Código Fiscal de la

---

[2] Registro digital: 177420, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, Materia(s): Civil, Tesis:I.3o.C.491, CFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tipo: Tesis Aislada.

Federación, como excepción para la preferencia del pago del fisco federal, esto es, no se trata de un crédito garantizado con prenda o hipoteca, pues para acreditar tal cuestión el demandante debía exhibir el contrato de prenda o hipoteca celebrado anteriormente al embargo trabado por la autoridad fiscal, lo que no aconteció.

Asimismo, tampoco se advierte que provenga de un adeudo por salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Se cita como apoyo, la tesis V-TASR-XXX-2672[3], de la Segunda Sala Regional del Norte-Centro, que establece.

> "**PREFERENCIA EN EL PAGO DE CRÉDITOS, PRUEBAS IDÓNEAS PARA ACREDITAR LA EXCEPCIÓN EN LA PREFERENCIA QUE OSTENTA LA AUTORIDAD FISCAL**.- De una interpretación del artículo 149, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos fiscales que ha determinado a cargo de los contribuyentes, excepto de aquellos adeudos que han sido garantizados con prenda o hipoteca. Ahora para acreditar que se encuentra en la situación excepcional establecida en el precepto legal en comento, **son suficientes, el contrato de hipoteca celebrado anteriormente al embargo trabado por la autoridad fiscal, y como certificación contable, así mismo acreditar la inscripción de la hipoteca respectiva**, en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. (11) Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3422/05-04-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de marzo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretario: Lic. Iván Ibarra Arias."

Máxime que, al emitir la resolución impugnada la autoridad enjuiciada precisó que de las constancias que obraban en el expediente administrativo, así como las aportadas por el recurrente, no se lograba comprobar que cumpliera con alguna de las excepciones del artículo 149, del Código Fiscal de la Federación, ya que los juicios interpuestos por el recurrente corresponden a juicios de arrendamiento inmobiliario, **sin que de ellos se desprenda que correspondan a un adeudo garantizado como prenda o hipoteca, adeudos por alimentos, salarios o sueldos y las indemnizaciones a los trabajadores**, siendo claro que el fisco tiene preferencia de pago sobre el entonces recurrente, toda vez que no acredita que se configure una de las excepciones establecidas, en el artículo 149 del

---

[3] R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007.

Código Fiscal de la Federación, cuestión que no fue desvirtuada por el accionante, dado que no acreditó ser acreedor preferente pues para ello debió exhibir la documental idónea de la cual se advirtiera que tiene un crédito garantizado con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, lo que no sucedió; de ahí que, no exista trasgresión a sus derechos como infundadamente aduce en sus argumentos resumidos en los **numerales 1) parte relativa, 2)** y **12).**

En ese tenor, se estima que contrario a lo señalado por el actor en sus argumentos resumidos en los **numerales 1) parte restante, 4), 9), 10)** y **11)** la determinación contenida en la resolución impugnada es legal, dado que el accionante no acredita que el derecho que tiene a su favor sea preferente al del fisco federal, y en consecuencia no es procedente que se le reconozca el derecho de acreedor preferente en relación con el crédito fiscal adeudado por el C. ******** ***** ********.

No es obstáculo a lo determinado, el argumento del actor resumido en el **numeral 7)**, en el cual señala que la autoridad reconoce que es acreedor del bien inmueble ubicado en ******* ******* ***** ********* ******* ********** ********** ****** **** ******* ********** ** ** ****** ** ****** ********** ******* propiedad del C. ******** ***** ********, puesto que no se encuentra en tela de duda la existencia de dicho crédito, sino su preferencia respecto al fisco federal, cuestión que ya fue definida, dado que no acreditó tener un derecho preferente al crédito a favor del fisco federal.

Asimismo, es infundado el argumento del demandante sintetizado en el **numeral 5),** respecto a que los artículos 472 y 473 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevén ciertos mecanismos que tienden a proteger los intereses de los acreedores, por lo que la autoridad fiscal debió ordenar se solicitara y se exhibiera un certificado, ya sea de

gravámenes, o de libertad de gravámenes, del inmueble sujeto a remate emitido por el Registro Público de la Propiedad y, sólo hasta obtenerlo debe iniciar el procedimiento de remate.

Es así, en atención a que en materia fiscal el artículo 177 del Código Fiscal de la Federación señala:

> "**Artículo 177**. Los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a los últimos diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente o por medio del buzón tributario del período de remate señalado en la convocatoria y, en caso de no ser factible hacerlo por alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 134 de este Código, se tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará el remate, en aquélla en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible en la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.
>
> Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán hacer las observaciones que estimen del caso, pudiendo enviarlas en documento digital que contenga firma electrónica avanzada a la dirección electrónica que expresamente se señale en la convocatoria, debiendo señalar su dirección de correo electrónico. Dichas observaciones serán resueltas por la autoridad ejecutora y la resolución se hará del conocimiento del acreedor."

El numeral de referencia establece que los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a los últimos diez años, serán notificados personalmente o por medio del buzón tributario del período de remate señalado en la convocatoria y que, solamente en caso de no ser factible la notificación por alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 134 de este Código, se tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará el remate, en aquélla en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible en la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.

Por tanto, el requisito de que se duele el actor fue debidamente cumplido en el caso, pues la autoridad exhibió las constancias de las que se advierte que le notificó el periodo de remate en fecha **24 de noviembre de 2022** a través del buzón tributario en términos de lo dispuesto por el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, como son el **Aviso electrónico de notificación pendiente en el Buzón Tributario de fecha 17 de noviembre de 2022**, así como de la **constancia de notificación de fecha 24 de noviembre de 2022** (fs. 111 y 112 de autos), siendo evidente que previo a efectuar esa notificación la autoridad obtuvo información en relación a los

acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a los últimos diez años, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 177 del Código Fiscal de la Federación, que prevé la notificación como el medio legal a través del cual el tercero tiene la posibilidad de conocer de los actos de autoridad que podrían causar una afectación a sus intereses jurídicos y, por ende, estar en aptitud de interponer oportunamente el medio de defensa, lo que además no fue controvertido por el demandante al formular su ampliación de demanda.

En otro aspecto, son inoperantes los argumentos del actor resumidos en los **numerales 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 37), 38)** y **39)**, en los que pretende controvertir los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo el crédito fiscal determinado al C. ******** ***** ********, como son que no se le notificó dicho procedimiento, además de negar lisa y llanamente que la convocatoria de remate tuviera firma autógrafa del funcionario que la emitió.

Ello, porque la convocatoria de remate de que se duele tiene como finalidad hacer efecto el cobro del crédito fiscal determinado al C. ******** ***** ********, de ahí que son actos que no se encuentran dirigidos al hoy demandante y por tanto, no le debían ser notificados.

Siendo suficiente, que la autoridad hiciera de su conocimiento la convocatoria de remate, pues ésta tiene como finalidad dar a conocer los bienes a rematar al contribuyente y a los terceros postores así como dar la pauta de controvertir los actos del procedimiento administrativo de ejecución anteriores a la convocatoria de remate, así como permitir a los terceros acreditar que tienen un derecho preferente.

Sin embargo, la convocatoria de remate no es un acto de molestia al no incidir directamente en la esfera jurídica del contribuyente, toda vez que el último acto de molestia previo a la convocatoria es el avalúo

de los bienes embargados, acto que de conformidad con el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación, es notificado de manera personal al contribuyente en todos los casos al ser estrictamente un acto de molestia, debiendo así cumplir con todos y cada uno de los requisitos de los actos administrativos; de ahí que, no es un requisito indispensable que la convocatoria de remate contenga firma autógrafa.

Sirve como criterio orientador el siguiente:

"**V-TASR-VI-97**
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE. NO REQUIERE CONTENER LA FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE LA EMITE.- Conforme al artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, los actos administrativos que se deban notificar deberán contener, entre otros requisitos, la firma del funcionario competente. Por su parte, el artículo 176, del citado Código, precisa que, una vez que quede firme el avalúo de bienes, el remate será convocado al día siguiente en que se surta aquel supuesto, a efecto de que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes, publicándose la convocatoria respectiva, cuando menos diez días antes del remate, misma que se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue conveniente. Así mismo, se prevé que en el caso de que el valor de bienes exceda a una cantidad equivalente a cinco veces el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, la convocatoria se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa en la que resida la autoridad exactora, dos veces con intervalo de siete días, efectuándose la última publicación cuando menos diez días antes del remate. De lo anterior se concluye, que la publicación de la convocatoria de remate, no es un acto administrativo que deba contener la firma de quien la emite, cuenta habida que, su finalidad es dar a conocer a los acreedores o, en su caso, al público en general, la venta del bien inmueble que se remata, aunado a que, el artículo 176, del Código Fiscal de la Federación, no previene como requisito que dicha publicación contenga la firma de su emisor. (14)
Juicio No.- 3753/00-03-01-9.- Sentencia de la Primera Sala Regional del Noreste, de 4 de abril del 2001, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mabel Vázquez Granados.
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 12. Diciembre 2001. p. 309

No pasa desapercibido para esta Sala los argumentos que hace valer el accionante resumidos en el **numeral 13)**, donde refiere que en atención a lo dispuesto en el artículo 1º Constitucional todas las normas relativas a los derechos humanos deben interpretar conforme a la Constitución y los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Al efecto, se indica que si bien el control difuso de la Constitución, así como el control difuso de la convencionalidad se deben ejercer aún de oficio, lo cierto es que del análisis efectuado por este Juzgador a la resolución impugnada no se advierte la violación a algún derecho fundamental protegido, entendidos éstos como aquellos derechos fundamentales del ser humano, a saber, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, libertad de conciencia o de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación, derecho al nombre, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, entre otros, así como tampoco limita, suprime o excluye alguno de esos derechos, ello en atención a que la sola mención de que una autoridad violentó derechos, es insuficiente para que, si el juzgador no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a derecho.

La circunstancia anterior, no significa desconocer el principio pro homine, toda vez que, su aplicación debe llevarse a cabo sin descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar las autoridades en atención a sus ámbitos competenciales.

Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Por lo tanto, el principio de acceso efectivo a la justicia no significa que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional –legalidad, igualdad, seguridad

jurídica, debido proceso, cosa juzgada–, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.

Resulta aplicable la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 24 de octubre de 2012, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, pág. 1587, que cita:

> **"PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.** Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional –principio pro persona o pro homine–, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional –legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
>
> Amparo directo en revisión 1131/2012.- Anastacio Zaragoza Rojas y otro.- 5 de septiembre de 2012.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Juan José Ruiz Carreón.
> Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce."

Resulta también aplicable la siguiente tesis:

> "Época: Décima Época
> Registro: 2000084
> Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO
> Tipo Tesis: Tesis Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Localización: Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: VI.1o.A.5 K (10a.)
> Pág. 4334
>
> [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Pág. 4334
>
> **DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO**. A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, y además, al margen de los medios de control concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de la República, todos los juzgadores deben ejercer un

> control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, si el Juez no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos mencionados, a fin de sostener la inaplicación de aquélla en el caso concreto, dicho control de convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo de que el Juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, la sola mención de que una autoridad violentó derechos humanos en una demanda de garantías, es insuficiente para que, si el juzgador de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a derecho.
>
> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUIT."

Así el principio de acceso efectivo a la justicia no conlleva la inobservancia de los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso y ante ello, es inconcuso que la substanciación de un juicio contencioso administrativo se encuentra sujeto a la satisfacción de las reglas del debido proceso, por lo que ante la insatisfacción de las mismas, no es factible acceder a la pretensión de la demandante respecto a considerar ilegal la resolución recurrida, sin que por ello se actualice restricción alguna a sus garantías de defensa debido proceso, el principio de legalidad y el derecho fundamental de seguridad jurídica como aduce.

En otro aspecto, se precisa que los argumentos que el demandante hace valer sintetizados en los **numerales 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35)** y **36)** son inoperantes, al estar encaminados a combatir la resolución impugnada, siendo inconcuso que en su ampliación de demanda ya no es el momento procesal oportuno para hacerlos valer, toda vez que estos bien pudo esgrimirlos desde la demanda inicial en tanto desde ese momento tenía conocimiento de la citada resolución.

Luego, es claro que el actor debió formular estos agravios desde el momento en que presentó su demanda inicial y no esperar a la ampliación de demanda, siendo que ya no es el momento procesal oportuno.

En ese sentido cabe agregar que, según se desprende del análisis efectuado al contenido de los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la ampliación de la demanda NO es una nueva instancia para combatir aspectos que ya se conocían desde antes de interponer la demanda, sino un medio para controvertir situaciones novedosas que se den a conocer a través de la contestación de la demanda, sin embargo, en la especie la actora ya conocía la resolución recurrida antes de presentar su demanda, y por tanto, el momento oportuno para controvertirla, era la demanda, y no la ampliación de la misma; por lo que, se reitera, los argumentos que nos ocupan son inoperantes por inoportunos, y por consecuencia no son susceptibles de ser analizados dentro del presente fallo.

Apoya la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia:

"**PRECLUSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, QUE PUDIERON ESGRIMIRSE EN EL ESCRITO INICIAL, Y QUE NO SE FORMULARON POR ALEGAR EL ACTOR, INDEBIDAMENTE, DESCONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO**.- El artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y su correlativo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén el supuesto en que el actor en el juicio de nulidad alegue desconocer el acto impugnado y señalan en su último párrafo que si la Sala Fiscal resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido; sin embargo, en el supuesto de que a pesar de concluirse que la notificación se realizó legalmente, la demanda de nulidad resulta presentada en tiempo, deben declararse inoperantes los conceptos de impugnación vertidos en la ampliación de demanda, pues el particular tenía conocimiento del acto impugnado desde que promovió inicialmente, pero indebidamente alegó su desconocimiento, atento al principio de preclusión consistente en que extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 425/2005. Uriarte Talavera, S.A. de C.V. 26 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza.
Amparo directo 41/2007. Riegos Modernos del Sur, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza.

Amparo directo 362/2007. Maquilas y Confecciones Gama, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Ríos López.
Amparo directo 540/2007. Arrendadora Mercantil Poblana, S.A. de C.V. 29 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretario: Gerardo Flores Báez.
Amparo directo 535/2007. Grupo Sepersa, Servicios Educativos y Recreativos Pérez Ramírez, S.A. de C.V. 11 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado.
Localización: Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXVII, Mayo de 2008.- Página: 911.- Tesis: VI.3o.A. J/67.- Jurisprudencia.- Materia(s): Administrativa"

En ese sentido resulta exactamente aplicable al caso concreto la Tesis cuyos datos de publicación y contenido se cita a continuación.

Tesis: XVIII.2o.11 K
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Novena Época 187626 1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Marzo de 2002
Pag. 1288
Tesis Aislada(Común)

"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO VERSE SOBRE HECHOS CONOCIDOS DESDE SU PRESENTACIÓN INICIAL, AUN CUANDO SE ENCUENTRE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.- La posibilidad de ampliar la demanda de amparo está condicionada a la aparición de nuevos hechos que hayan sido desconocidos por el quejoso al momento de presentar su libelo inicial y se encuentren directamente relacionados con el ejercicio de la acción constitucional. De ahí que por más que la solicitud se presente dentro del término legal, si la ampliación no obedece al conocimiento de hechos contenidos en el informe con justificación, en la ampliación del mismo o cualquier otra circunstancia, sino a hechos conocidos desde la presentación inicial de la demanda, es improcedente la solicitud formulada; de lo contrario, se propiciaría una serie interminable de ampliaciones de demanda, so pretexto de encontrarse dentro del término legal para su promoción, lo que redundaría en detrimento del principio de expeditez en la impartición de justicia contenida en el artículo 17 constitucional."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

En síntesis, contrario a lo señalado por la demandante en sus argumentos resumidos en el **numeral 14)**, al no acreditar los extremos de su acción, obligación que le impone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, debe reconocerse la validez de la resolución que se impugnada; máxime que, tampoco se destruyó la presunción de legalidad de que goza el acto de la autoridad, en los términos

del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En las relatadas consideraciones, toda vez que la parte actora no demostró que se actualice alguna de las causales de ilegalidad previstas en el artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede con fundamento en el artículo 52, fracción I, de la citada Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a reconocer la validez de la resolución impugnada que le atribuyen los artículos 68, del Código Fiscal de la Federación y 42, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos *50* y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora **no probó** su pretensión.

II.- **SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada,** por los fundamentos y motivos expuestos en el Considerando Último del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL A LAS PARTES.

Así lo resolvieron y firman el Magistrado y Secretarias de Acuerdos en funciones de Magistradas por Ministerio de Ley, que integran la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la presencia de la Licenciada **María del Carmen Rivera Zaldivar,** Secretaria de Acuerdos, quien da fe.

MCRZ

---------- ----------

ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Instructor de la Primera Ponencia

ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Primera Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley en la Tercera Ponencia.

LIDIA MARGARITA ROBLERO HERNÁNDEZ
Primera Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley en la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala.

María del Carmen Rivera Zaldivar.
Secretaria de Acuerdos.

Ese de señalar que el día 31 de enero de 2024, La Licenciada María del Carmen Rivera Zaldivar, Secretaria/o de acuerdos con adscripción en la Sala Regional de Chiapas, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108, 113, fracciones II y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, por tratarse de nombre del actor, domicilio y datos de la resolución impugnada. Conste."